



El Ministerio Público Fiscal y la protección del ambiente en America Latina



Supervisión General

Andrea M. Brusco

Coordinadora de Gobernanza Ambiental – ONU Medio Ambiente Oficina para
America Latina y el Caribe

Consultor

Juan Sebastián Lloret

Abogado - Máster en Derecho Ambiental - Miembro del Ministerio Público Fiscal
de la Provincia de Salta – República Argentina

Este Documento de Trabajo es un producto de cooperación técnica del PNUMA con la Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental. El contenido y opiniones expresadas son a título personal y no necesariamente reflejan los puntos de vista o las políticas del PNUMA o de sus Estados miembros o aprobación por parte de la Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental.

Este Documento puede ser reproducido en todo o en parte y de cualquier forma con fines educativos o sin ánimo de lucro sin permiso especial de los autores, toda vez que se cite la fuente. PNUMA y la Red Latinoamericana de Ministério Público Ambiental agradecerán recibir una copia de cualquier publicación que use el presente documento como fuente.

Fecha de compilación: 3 de diciembre de 2017

INDICE

1. PRÓLOGO.....	2
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. METODOLOGIA.....	4
4. SECUENCIA DE TAREAS REALIZADAS: (VER FIGURA 1).....	6
4.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RELATIVO A LOS TEMAS DE LA CONSULTORÍA (VER ANEXO I).....	6
4.2. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONSULTA PARA EXPERTOS FISCALES DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS:	6
4.3. SUPERVISIÓN DEL PNUMA:.....	8
4.4. DETECCIÓN DE EXPERTOS FISCALES CONSULTABLES POR PAÍS CON EL ASESORAMIENTO DE LA REDLMPA: .	8
4.5. RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS:	8
4.6. CONTENIDOS DEL DOCUMENTO TÉCNICO FINAL:	9
4.7. INFORMACIÓN DE BASE PARA EL ANÁLISIS:	10
5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION POR NUCLEOS TEMÁTICOS: (VER FIGURA 4).....	10
5.1. INSTITUCIONALIDAD FISCAL AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA:	10
5.2. AMBITOS JURÍDICOS DE COMPETENCIA AMBIENTAL PRESENTES EN LATINOAMÉRICA:.....	12
5.3. INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA:.....	15
5.4. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA:	17
5.5. MECANISMOS DE ACCESO A JUSTICIA AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA:	19
5.6. INCENTIVOS DE ACCESO A JUSTICIA AMBIENTAL PARA GRUPOS VULNERABLES EN LATINOAMÉRICA:.....	21
5.7. HERRAMIENTAS DE LITIGACIÓN FISCAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA:.....	21
5.8. HERRAMIENTAS JURÍDICAS DE FISCALES PARA PROVEER ACCESO A JUSTICIA AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA:	24
6. CONCLUSIONES: FORTALECER EL SISTEMA FISCAL AMBIENTAL ESPECIALIZADO LATINOAMERICANO:	27
7. AGRADECIMIENTOS:.....	30
8. ANEXOS:.....	31
8.1. ANEXO I - BIBLIOGRAFIA	31
8.2. ANEXO II – CUESTIONARIO	33
8.3. ANEXO III - FUENTES BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS DE CONSULTA (DE CONSULTA WEB):.....	47

1. PRÓLOGO

Uno de los más grandes problemas en Latinoamérica para la protección del medio ambiente es la baja implementación de las normativas ambientales. En muchos de nuestros países hay una buena legislación para la prevención y punición de los delitos ambientales, pero no se consigue una aplicación efectiva de esta legislación. En las últimas dos décadas, los sistemas procesales penales de la mayoría de los países de América Latina han experimentado cambios muy significativos. Una parte importante de esos cambios se ha traducido en el otorgamiento de nuevas funciones al Ministerio Público Fiscal que ha pasado a constituirse en el órgano encargado de la persecución penal¹.

Así, la actuación de los agentes fiscales del Ministerio Público se torna esencial, ya que a ellos les compete la defensa de la sociedad mediante fiscalización de la ley. Con el objetivo de contribuir con la protección del medio ambiente, y valiéndose de la necesidad de la implementación de la ley como una herramienta para esto, el 26 de noviembre de 2008, en la Ciudad de Bonito, Mato Grosso del Sur, Brasil, fue creada la “Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental”. Hoy ya la integran 328 fiscales de 19 países de toda Latinoamérica (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Rep. Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Uruguay, México y Guyana Francesa).

Esta iniciativa tuvo entre sus finalidades originales la integración entre agentes fiscales de Latinoamérica para facilitar el intercambio de información, de experiencias exitosas, buenas prácticas, el entrenamiento de fiscales y la divulgación del Derecho Ambiental entre los países, además de actuaciones coordinadas en cuestiones de daño ambiental o delitos transfronterizos, siempre respetando la autonomía de cada Ministerio Público y las reglas de Derecho Internacional.

La Red, no es una iniciativa gubernamental, pero es una unión de esfuerzos entre agentes fiscales para una mayor efectividad a favor de la calidad de vida en el planeta. Los objetivos de la red son: (i) intercambio de informaciones; (ii) actuación integrada; (iii) capacitación; (iv) fortalecimiento del Ministerio Público y de los mecanismos de defensa del medio ambiente; (v) ampliación de los objetivos propios del trabajo del Ministerio Público en la defensa del medio ambiente en Latinoamérica. Sus principios son: (i) solidaridad; (ii) horizontalidad; (iii) cooperación; (iv) respeto; (v) actuación no personalizada y (vi) transparencia y publicidad de todos los actos de la red.

Desde su creación, esta forma de cooperación difusa y horizontal en Red ha consolidado una diversidad de herramientas para todos los fiscales ambientales de la región. Ha generado el sitio www.mpambiental.org, que hoy es una de las bases de datos más completas disponibles en la web sobre legislación, jurisprudencia y doctrina en Derecho Ambiental de Latinoamérica.

¹ Módulo 1 - El Ministerio Público Fiscal en la Reforma Procesal Penal en América Latina. Correspondiente al Curso “Desafíos del Ministerio Público Fiscal y la Persecución Penal en América Latina” dictado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) con el auspicio de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos.

También ha producido una diversa cantidad de trabajos y publicaciones que pueden ser consultadas desde allí.

En esta ocasión, debemos celebrar la instancia que ha posibilitado el PNUMA, en cabeza de Andrea Brusco, que ha posibilitado realizar el presente trabajo sobre “El Ministerio Público Fiscal y la protección del Ambiente en América Latina”, el cual ha estado a cargo del Dr. Juan Sebastián Lloret, miembro del Ministerio Público Fiscal Argentino.

En primer término, debo señalar y felicitar al PNUMA, quien mediante una convocatoria pública ha terminado eligiendo a quien ha sido el responsable del trabajo, puesto que sólo sus grandes condiciones profesionales y su profundo conocimiento de la temática y la normativa ambiental ha permitido concretar este extraordinario y titánico trabajo en unos pocos meses.

En segundo término, y en lo referente a la presente investigación, pronostico sin lugar a equivocarme, que será de enorme aporte para los interesados en la temática y permitirá a quienes se interioricen en él, apreciar una fuente de información para pensar y generar un sinnúmero de diagnósticos y reflexiones atinentes al Estado del Derecho Ambiental en nuestra región, propia de la dialéctica entre las diversas instituciones y países consultados.

Por último y sin ánimo de extenderme, celebro que el presente trabajo pueda darse a difusión puesto que posibilitará nuevos desarrollos y reflexiones todas ellas orientados a mejorar las instituciones jurídicas actuales e interpelar y mejorar las futuras.

Dr. Blas Matías Michienzi
Secretario Ejecutivo
Red-MPAmbiental

2. INTRODUCCIÓN

La protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, consagrado en América Latina tanto a través de acuerdos internacionales y regionales, como por medio de las constituciones y leyes ambientales nacionales, requiere de la creación de instrumentos y de la puesta en marcha de mecanismos específicos que atiendan a la complejidad de la problemática ambiental.

El creciente número de afectaciones al ambiente y la magnitud de los daños causados, se ha convertido en un grave motivo de preocupación para la comunidad internacional durante los últimos años. Habida cuenta de la naturaleza compleja de los delitos contra el medio ambiente, se precisa un enfoque integral que permita combatirlos con eficacia. En este contexto, los esfuerzos del PNUMA por hacer frente a los delitos ambientales se rigen por el desarrollo y la promoción del estado de derecho en materia ambiental.

Como lo señala la “Declaración sobre justicia, gobernanza y derecho para la sostenibilidad ambiental” presentada a la Conferencia Río+20 “Únicamente mediante la participación activa de todos los componentes de la sociedad, especialmente las instituciones nacionales y subnacionales y los oficiales responsables de las cuestiones de justicia, gobernanza y derecho, tales como los magistrados, fiscales, auditores y otros funcionarios clave, podrán lograrse

avances significativos que sean sostenibles, respondan a las necesidades de los pueblos del mundo y protejan los derechos humanos²

En muchos de nuestros países, los fiscales desempeñan un papel muy importante para la protección del medio ambiente, y se han constituido en actores claves en el cumplimiento del deber de los estados de garantizar el acceso a la justicia en material ambiental.

La experiencia acumulada en la región es valiosa y puede ser inspiradora para los países al momento de considerar opciones y mecanismos para la prevención y persecución de los ilícitos ambientales. Desde su creación en 2008, La Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental, cumple con un importante rol de facilitación de la cooperación y coordinación que involucra a más de 270 fiscales y operadores jurídicos de dieciocho países.

Precisamente, este trabajo tiene como objetivo explorar las condiciones institucionales, las herramientas jurídicas y las opciones instrumentales utilizadas por las Fiscalías de cada país frente a los ilícitos ambientales.

Se busca poder brindar elementos para diagnosticar el presente de estas organizaciones públicas, aprender de las experiencias comparadas y proyectar los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional.

Lo dicho, con la finalidad de ofrecer elementos de avance ciertos logrados por los Ministerios Públicos Fiscales, en ejercicio de sus cometidos de protección ambiental y garantía del goce y disfrute de los intereses ambientales generales de la sociedad, que ayuden en la toma de decisión.

3. METODOLOGIA

Con esta Consultoría, la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en alianza con la Red Latinoamericana de Ministerio Público Ambiental, busca explorar las condiciones institucionales, las opciones instrumentales y las herramientas jurídicas utilizadas por las Fiscalías de cada país, buscando poder diagnosticar su presente, aprender de las experiencias comparadas y proyectar los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional para el desarrollo de estas organizaciones públicas.

La realización de este informe técnico final fue precedida por tareas de recopilación y análisis de material bibliográfico relativo a los temas del derecho y la actuación que utilizan los procuradores de justicia de la región al atender la problemática de la criminalidad y contaminación ambiental, haciendo foco en la tarea de las unidades especializadas que hoy existen, por entenderse que se han convertido en pieza fundamental de la lucha contra la degradación ecológica y el acceso a justicia de víctimas ambientales.

Para ello, se identificó instituciones jurídicas y cuestiones problemáticas claves para comparar los sistemas y, con ello, se elaboró un documento de consulta para expertos fiscales por país y

²
<http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/RIO+20/Declaracion%20Rio+20%20Congreso%20de%20Justicia,%20Gobernanza%20y%20Derecho.pdf>

se los encuestó. Sobre 20 países hispanoparlantes contactados y con representatividad en la Red, se consiguió la respuesta de 18 de ellos.

Los resultados iniciales plasmados en este papel, son los primeros datos que se pueden observar de un ejercicio superficial y comparado de las respuestas recopiladas. Seguramente el análisis con nuevos enfoques de los datos obtenidos, podrán alumbrar nuevos resultados y conclusiones.

Se acuña y utiliza el concepto de “instrumentos jurídicos” para describir la información obtenida sobre mecanismos previstos en general por las legislaciones nacionales para la protección ambiental en cada país, distinguiéndolo del término “herramientas jurídicas”, que se usa al evaluar si las fiscalías están dotadas de estos “instrumentos” entre sus facultades de actuación.

Los focos de análisis del presente Documento Técnico, por país, son: sus principios de derecho ambiental, esenciales y vigentes; los ámbitos jurídicos materiales de protección de sus derechos ambientales; los instrumentos jurídicos para atender casos ambientales emblemáticos y los bienes o problemáticas ambientales sectoriales más comunes; y, la disponibilidad instrumental para el acceso a la protección y justicia ambiental. Luego, sobre los mismos tópicos, se busca saber con qué herramientas se dotan y con cuáles no a las fiscalías para sobrellevar sus cometidos de garantía del goce y disfrute de los intereses ambientales generales de la sociedad.

Finalmente se expone las capacidades y prácticas actuales, y los desafíos y recomendaciones para asistir en la toma de decisiones de mejora al respecto.

Item	Descripción
Objetivo General	Explorar las condiciones institucionales, las herramientas jurídicas y las opciones instrumentales utilizadas por las Fiscalías frente a los crímenes ambientales, diagnosticando el presente de estas organizaciones públicas, aprendiendo de las experiencias comparadas y proyectando los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional, con la finalidad de ofrecer los elementos de avance ciertos logrados por los Ministerios de cada país, en ejercicio de sus cometidos de protección ambiental y garantía del goce y disfrute de los intereses ambientales generales de la sociedad, que ayuden en la toma de decisión.
Objetivo Específico	Elaborar un documento técnico que recoge y analiza información relevante al fortalecimiento de la aplicación efectiva para combatir los delitos ambientales en Latinoamérica
Tareas	<ul style="list-style-type: none"> • Recopilación y análisis de material bibliográfico relativo a los temas de la consultoría • Elaboración del documento de consulta para expertos fiscales de los países latinoamericanos • Control del PNUMA • Detección de expertos fiscales consultables por país con el asesoramiento de la RedLMPA • Recepción de las respuestas • Contenidos del documento técnico final • Control de PNUMA • Exposición del documento en congreso de la RedLMPA

Figura 1
OBJETIVOS Y SECUENCIA DE TAREAS REALIZADAS

4. SECUENCIA DE TAREAS REALIZADAS: (ver Figura 1)

4.1. Recopilación y análisis de material bibliográfico relativo a los temas de la consultoría (ver [Anexo I](#))

El recorrido de la tarea inicia de la definición de acceso a la justicia en el marco del trabajo de ONU Medio Ambiente.

Desde allí, se revisaron documentos tales como la Declaración de Río, enfocando el Principio 10 de los Derechos de Acceso (a la Información, Participación y Justicia).

Se evaluó el documento preliminar del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, hasta el avance alcanzado en la negociación hasta ese momento. También se estudiaron las 100 Reglas de Brasilia para el acceso judicial de personas vulnerables.

Para tener un punto de partida sobre la realidad fiscal en la temática, se utilizó el texto “El Derecho Ambiental en Latinoamérica y la Actuación del Ministerio Público” de la RedLMPA.

Por último, para armonizar el desafío que implica la existencia de los distintos derechos nacionales, que poseen sistemas e instituciones jurídicas y repartos organizacionales diferentes, se recurrió al uso de los proyectos de Códigos Modelos para Iberoamérica, elaborados por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; en particular los referidos a los procesos penales, administrativos -judicial y extrajudicial- y colectivos -de noción eminentemente civil-.

4.2. Elaboración del documento de consulta para expertos fiscales de los países latinoamericanos:

Se confeccionaron preguntas para que referentes fiscales por cada país latinoamericano conteste, proponiendo tópicos centrales que guíen la caracterización de sus derechos nacionales y el sistema de acceso a justicia ambiental (que denominamos en el documento como “instrumentos”), y en particular el ejercicio de sus potestades procesales de protección del ambiente (“herramientas”).

La definición de “conflicto o caso ambiental” que usamos, se distingue básicamente de la de otros sectores jurídicos clásicos, dada la complejidad técnico-científica y el entramado de intereses, dispares y multifacéticos, que concita: el uso de recursos ambientales es a la vez una actividad querida por el sistema económico, político y laboral, como controlada por el sistema jurídico, burocrático y social.

Por ello, se trabajó sobre las cuatro partes medulares que, como resaltó Raúl Brañes, clasifican las distintas vías a través de las cuales las autoridades judiciales intervienen en este tipo de conflictos jurídicos y que se denominan convencionalmente como la justicia constitucional, la justicia civil, la justicia penal y la justicia administrativa. Es que el derecho ambiental -dice- debe ser visto como un conjunto de normas jurídicas orientadas hacia la prevención del daño ambiental y, subsidiariamente, hacia su reparación (El Acceso A La Justicia Ambiental En América Latina; Estudio preparado para el PNUMA por el Dr. Raúl Brañes, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental, A.C.; México, D.F, febrero de 2000;

http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/Acceso_Justicia_Ambiental_Raul_Branes.pdf
).

La prevención del crimen ambiental, que aglutina la tipificación de los atentados ecológicos más graves, se inicia con las regulaciones que anteceden al derecho penal, ordenando o corrigiendo las conductas con impacto. En el sistema de comando y control ambiental del Estado, la punición es la última instancia -ultima ratio-.

Esta teoría de la unicidad de la responsabilidad ambiental, expuesta en documentos de PNUMA que se citan más adelante y cuya lectura se recomienda, es la que funda todo el trabajo exploratorio de la consultoría.

Así se consignaron:

- Preguntas para caracterizar la estructura fiscal existente en su país;
- Preguntas para conocer la regulación esencial de la protección ambiental vigente en su país;
- Preguntas dirigidas a obtener un detalle general del sistema de responsabilidad ambiental vigente en su legislación;
- Preguntas para conocer los instrumentos legales vinculados a derechos de acceso a la protección ambiental;
- Preguntas orientadas a lograr una descripción general del acceso a justicia ambiental.

Lograda, con las respuestas, esta caracterización de la normativa ambiental y de la institucionalidad de los Ministerios Públicos Fiscales, se procedió a buscar formas de vincularlas a la realidad del desempeño fiscal ambiental por país.

El motor de la exploración fue y es situarse en una preconcepción: estas organizaciones están dotadas de cualidades y competencias tales, que pueden propiciar enormemente a la protección ambiental y el acceso de los ciudadanos para el pleno ejercicio de sus derechos ambientales. Partimos entonces de esta visión positiva de lo fiscal-ambiental, reconociendo su potencial como articulador para la catalización y traslado de conflictos ambientales a los Tribunales, y de la promoción de respuestas positivas judiciales para la sociedad.

Pensamos que las desviaciones institucionales o de sus funcionarios, que puedan presentarse en la casuística de cada país o estado, no contradicen esta afirmación sobre sus potencialidades para realizar los fines socioambientales públicos.

Entonces, con este objetivo de verificación, se formularon:

- Preguntas para conocer la organización fiscal en relación a la regulación de la protección ambiental;
- Preguntas orientadas a detectar la existencia de unidades fiscales especializadas;
- Preguntas para caracterizar la actuación de las fiscalías con competencia ambiental en su conjunto.

Por último, puede verse que la forma de estructuración de la encuesta resultó pensada para llevar un desarrollo secuenciado del operador jurídico al responder, con la finalidad de facilitar la comprensión y exposición del consultado (ver Figura 2).

Preguntas:
para caracterizar la estructura Fiscal existente en su País
para conocer la regulación esencial de la protección ambiental vigente en su país;
dirigidas a obtener un detalle general del sistema de responsabilidad ambiental vigente en su legislación;
para conocer los instrumentos legales vinculados a derechos de acceso a la protección ambiental;
orientadas a lograr una descripción general del acceso a justicia ambiental.
para conocer la organización fiscal en relación a la regulación de la protección ambiental;
orientadas a detectar la existencia de unidades fiscales especializadas;
para caracterizar la actuación de las fiscalías con competencia ambiental en su conjunto.

Figura 2

4.3. Supervisión del PNUMA:

El documento de consulta resultante del proceso de investigación bibliográfica y normativa, la formulación de preguntas estructuradas y secuenciales y el cuestionario elaborado se remitieron a conocimiento de PNUMA y la Secretaría Ejecutiva de la Red Latinoamericana mediante correo electrónico, para su observación previa. El resultado del cuestionario terminado es el que se acompaña en el [Anexo II](#).

4.4. Detección de expertos fiscales consultables por país con el asesoramiento de la RedLMPA:

La detección de posibles expertos de la RedLMPA para contestar el documento exploratorio se realizó por dos vías: la remisión de correos electrónicos a los representantes por País ante la red, invitando a contestar los formularios, y la publicación del proyecto y los cuestionarios en la página web de la red.
(<http://www.mpambiental.org/site/review/6563>).

4.5. Recepción de las respuestas:

Se envió consultas a todos los países de habla hispana (conforme los alcances estatutarios de la red latinoamericana) haciendo un total de 20 países, obteniendo respuestas de 17 de ellos hasta el día 18 de noviembre de 2016 (ver Figura 3), contestando luego de la exposición del informe un país que no pudimos examinar (Bolivia) y restando solo 2 expertos de Cuba y Nicaragua en contestar.

N°	PAIS (1)	N° DE ORDEN	EXPERTO ENCUESTADO Nombre y Apellido (2.1)	CARGO (2.2)	NIVEL COMPETENCIAL (3.3)	REPARTICIÓN (2.2)	AUXILIARES Nombre/s y apellido/s, cargo/s (2.3)
1	Argentina	1.1	RAMIRO GONZÁLEZ	Fiscal	Federal	Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (U.F.I.M.A.)	
		1.2	CARLOS ALFREDO MATHEU	Fiscal	Provincial	Fiscalía de Instrucción Criminal	
		1.3	MARÍA CARLOTA UCÍN	Letrada Relatora Civil, Comercial y Laboral	Provincial	Procuración General	
		1.4	BLAS MATÍAS MICHENZI	Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas	Provincial	Unidad Fiscal Especializada del Medio Ambiente (UFEMA)	
2	Brasil	2.1	SANDRA VERÓNICA CUREAU	Subprocuradora General de la República	Federal	Ministerio Público Federal	
		2.2	SILVIA CAPPELLI	Procuradora de Justicia	Estadual	10 ma. Procuraduría de Justicia Criminal	Raquel Hunsche, Asesora de Procuraduría de Justicia
		2.3	LUIS FERNANDO CABRAL BARRETO JUNIOR	Promotor de Justicia	Estadual	Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Cultural	
		2.4	PAULO CÉSAR ZENI	Promotor de Justicia	Estadual	Asesoría Especial de la Procuración General	
		2.5	VANIA MARIA TUGLIO	Promotora de Justicia	Estadual	Procuraduría de Justicia Criminal Ambiental	
		2.6	LEONARDO CASTRO MAIA	Promotora de Justicia	Estadual	Coordinador Regional de las Fiscalías Ambientales de la Cuenca del Río Doce	
3	Chile		MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBÁN	Director de Unidad Especializada	Nacional	Unidad Especializada de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional	Andrés Salazar Cádiz, Subdirector de Delitos Económicos y Medioambientales. Bárbara Sanhueza Arancibia, Abogada Asesora de la Subdirección
4	Colombia		GLORIA ELSA ARIAS RANGEL	Fiscal Penal Delegada de Circuito	Nacional	Fiscalía Temática de Protección a los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Fiscalía General	
5	Costa Rica	5.1	JOSÉ PABLO GONZÁLEZ	Fiscal Adjunto	Nacional	Fiscalía Penal Ambiental	
		5.2	SERGIO ALBERTO VALDELOMAR FALLAS	Fiscal Adjunto	Nacional	Unidad de Capacitación y Supervisión	
6	Ecuador	6.1	SILVIA JEANETH CASTRO MEDINA	Experta Litigante ante la Corte Nacional y Constitucional	Nacional	N° 3 de la Fiscalía General del Estado	
		6.2	SIEGFRIED BORMMAN PEÑAHERRERA MANOSALVAS	Fiscal	Provincial	Fiscalía de Orellana	
7	El Salvador		ELIA ROXANA MOLINA MEJÍAS	Fiscal Jefe	Regional/ Provincial	Unidad de delitos contra el Ambiente y Salud	
8	Guatemala		AURA MARINA LÓPEZ CIFUENTES	Fiscal de Sección	Nacional	Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente	
9	Honduras		LORENA FERNÁNDEZ MEZA	Fiscal Jefe	Nacional	Fiscalía Especial de Medio Ambiente	Karla Marian Laitano, Fiscal Jefe de Sección de de Delitos cometidos contra el adecuado uso del suelo y Aire. Mercedes Ruiz, Fiscal Jefe de Sección de Delitos cometidos contra el adecuado uso del Agua
10	México		MARISOL VEGA TORRES	Agente Fiscal	Federal	Ministerio Público de la Federación	
11	Panamá		THALÍA LORETTYS PALACIOS GUTIÉRREZ	Fiscal de Circuito	Regional (Circuito)	Jefa de la Unidad de Ambiente	
12	Paraguay		JORGE SOSA	Fiscal General Adjunto	Nacional	Encargado de las Fiscalías Especializadas de Delitos Ambientales	Daniel Aguadé, Titular de la Dirección de Delitos Ambientales
13	Perú		FLOR DE MARÍA VEGA ZAPATA	Fiscal Superior	Nacional	Coordinadora de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental	Abel Napoleón Saldaña Arroyo, Asesor de la Coordinación Nacional
14	Puerto Rico	14.1	LIANY A. VEGA NAZARIO	Abogada de Secretaría Auxiliar en lo Civil	Nacional	Departamento de Justicia	Raquel Román Hernández, Gerente (I) de Asuntos Legales de la Junta de Calidad Ambiental. Eliezer Ramos Parés, Director de la División de Derecho Ambiental
		14.2	ARACELIS PÉREZ CORREA	Fiscal Auxiliar	Nacional	N° IV de la Oficina del Jefe de los Fiscales del Departamento de Justicia	
15	República Dominicana	15.1	FRANCIA SOCORRO CALDERÓN COLLADO	Procuradora General Titular de la República	Nacional	Procuraduría Especializada de Medio Ambiente Nacional	
		15.2	MIRIAN ELIZABETH MOREL PAYAMPS	Procuradora Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Regional	Departamento Judicial del Distrito de Santiago.	Juan Isidro Dilone, Abogado Asistente
		15.3	JOSÉ ESPINAL BEATO	Procurador General de Corte de Apelación de Medio Ambiente	Regional	Departamento Judicial del Distrito Nacional	Juan Castillo Cabral, Procurador General de Corte de Apelación de Medio Ambiente, Departamento Judicial de San Juan de La Maguana. Euren Cuevas Mediana, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente
		15.4	ANDRÉS M. CHALAS VELÁZQUEZ	Procurador Adjunto	Nacional	Coordinación de Relaciones Internacionales del Procurador General de la República	
16	Uruguay		GABRIELA AGUIRRE GROMPONE	Directora (E) del Departamento de Cooperación Internacional	Nacional/ Departamental (regiones)	Fiscalía General de la Nación	Sylvia Lovesio, Fiscal Letrada Departamental de San José de 1° turno, Ana Monteiro, Fiscal Letrada Departamental de Fray Nidia Morosini, Fiscal Letrada Departamental de Treinta y Tres de 1° turno.
17	Venezuela		ABIGAIL JOSÉ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	Director de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental	Nacional	Ministerio Público	Yamile Barreto Peñaranda, Sub Directora de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental
18	Bolivia		JORGE FERNÁNDEZ TARDIO	Fiscal de la Unidad Corporativa de Delitos Patrimoniales N° 1	Regional	Ministerio Público	Álvaro Zabala Serrano, Auxiliar de Fiscalía Corporativa

Figura 3 - EXPERTOS ENCUESTADOS

4.6. Contenidos del documento técnico final:

El presente documento técnico final incluye: -las explicaciones de la tarea de consultoría y sus resultados iniciales; -las filmas que conforman la presentación del consultor a los concurrentes al VIII Congreso Latino-Americano de Ministerio Público Ambiental, a realizarse entre los días 23 a 25 de noviembre de 2016, en el auditorio del Edificio Sede de las Promotorías de Justicia de la Ciudad de Cuiabá, en el Estado de Mato Grosso, República Federativa del Brasil, coordinado por la RedLMPA y que tendrá como órgano anfitrión al

Ministerio Público local. El texto, previa evaluación del PNUMA, se halla dirigido a exponerse en 20 minutos de disertación predispuestos para el panel.

Además, se incluye Anexos que resultan información auxiliar útil para PNUMA.

Los conceptos que se exponen en el texto resultan ágiles y facilitan la comprensión y discusión de los destinatarios primarios del trabajo: los fiscales que integran el auditorio del Congreso. Sin embargo, no nos resulta ajeno que la información colectada puede ser procesada en otros planos y perspectivas y lograr mayores aportes para la toma de decisión de los Estados y Organismos internacionales.

4.7. Información de base para el análisis:

Los formularios respondidos por los Fiscales consultados se encuentran acompañados como Anexos al Informe Técnico (Anexos VII al XXXIX).

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION POR NUCLEOS TEMÁTICOS: (ver Figura 4)

5.1. Institucionalidad Fiscal Ambiental en Latinoamérica:

El primer análisis de las encuestas nacionales muestra un gran robustecimiento del sistema de protección ambiental en los Ministerios Públicos Fiscales de la Región Latinoamericana. Todos los países que la integran, sin excepción, han dotado de competencias ambientales a sus organizaciones de persecución. Esto resulta un evidente reflejo de que, como se verá en su oportunidad, casi todos los países con excepción de Uruguay, han elaborado instrumentos penales de protección ambiental.

Este sector judicial requirente tiene, como fortaleza de base, haber alcanzado un gran desarrollo técnico-jurídico y experiencia en la tarea investigativa, producto del tiempo insumido en su trabajo primordial de acusación penal. Vamos a focalizar ahora la evidencia de esto en dos cuestiones.

Lo primero es que solo Chile, Ecuador, Puerto Rico y Uruguay informan no poseer estructuras que abarquen la materia ambiental. El resto sí las posee.

Igualmente, la Fiscalía General uruguaya ya inició un proceso de creación de una Unidad Especializada a nivel central, dictando la Resolución N° 405/2016 que colocó a tres fiscales - que participaron de la encuesta- a cargo de un proceso de elaboración normativa, suscribiendo además un convenio de colaboración con el organismo ejecutivo competente para su asesoramiento.

Resultados de la Investigación por Nucleos Temáticos	<ul style="list-style-type: none"> • Institucionalidad Fiscal Ambiental en Latinoamerica • Competencias Jurídicas Ambientales en Latinoamerica • Instrumentos Jurídicos para la Protección Ambiental en Latinoamerica • Sistema de Responsabilidad Jurídica para la Protección Ambiental en Latinoamerica • Mecanismos de Acceso a Justicia Ambiental en Latinoamerica • Incentivos de Acceso a Justicia Ambiental para Grupos Vulnerables en Latinoamerica • Herramientas de Litigación Fiscal para la Protección Ambiental en Latinoamerica • Herramientas Jurídicas de Fiscales para Proveer Acceso a Justicia Ambiental en Latinoamerica
Conclusiones	Fortalecer el Sistema Fiscal Ambiental especializado Latinoamericano

Figura 4 - RESULTADOS DE LA EXPLORACION POR NUCLEOS TEMÁTICOS

Por su parte, Perú tiene 39 fiscalías ambientales, Venezuela 23, Paraguay 18, República Dominicana más de 10 y Costa Rica 3. Son un claro ejemplo de la experiencia creciente en la región. Además, tienen una (1), Colombia y Guatemala.

El caso paradigmático de implementación de promotorías fiscales ambientales es Brasil. Tiene múltiples en los distintos estados confederados (por ej. en las consultas se enumeran 4 en Río Grande do Sul y 3 en Maranhão). Este país, como México y Argentina, tienen una organización federal, y su caso en particular hace dificultoso contabilizarlas en detalle por la cantidad que tienen los varios estados.

Del relevamiento, se conoce que Argentina tiene una única Unidad Fiscal de Investigaciones del Medio Ambiente (UFIMA) en la órbita federal, y en la Ciudad de Buenos Aires una Unidad Fiscal Especializada del Medio Ambiente (UFEMA).

Por otra parte, los ámbitos de actuación de todas estas unidades especializadas o fiscalías con competencia ambiental, en su gran mayoría, son solo penales. Existen casos como El Salvador, que abarca también la actuación civil y, Guatemala y México, que abarcan la competencia constitucional junto a la penal.

Dos casos son sumamente notorios. Los expertos de República Dominicana disienten si sus fiscales tienen más herramientas que la penal; le agregan, algunos unas y otros otras. Esto deja ver que, por la vía de la interpretación del sistema orgánico y la aplicación del sistema ambiental instrumental, los fiscales pueden ejercitar a más de la penal, también la materia constitucional, administrativa y civil, por ejemplo. Y es la especialización lo que les permite construir ese recurso creativo por medio de la jurisprudencia y los criterios de actuación.

El otro caso notorio es el de las procuradurías brasileras, que pueden utilizar como herramientas el ámbito constitucional, administrativo extrajudicial, civil y penal para su trabajo de protección. Es decir, que es perfectamente posible tener organismos requirentes con capacidades abarcativas de la totalidad de instrumentos de judicialización. Es un objetivo lícito y prácticamente esperable de mejora.

Arribamos a la segunda cuestión que -adelantamos- íbamos a observar. Y esto es que las organizaciones fiscales tienen una considerable ventaja respecto de otras organizaciones tradicionales, que las hacen cada vez más elegibles como entidades de protección ambiental.

Cuentan en su gran mayoría con el auxilio de recursos humanos y técnicos originados, en general, por su actividad propia de investigación penal tradicional.

Casi la totalidad de los países encuestados tienen, en primera medida, la colaboración de las policías administrativas para actuación contra el crimen. Estas poseen distintas denominaciones (Policía, Gendarmería, Carabineros, Policía Militar, etc.) y, en muchos casos, incluyen a su vez institutos o departamentos forenses que realizan la actividad científica de asesoramiento a la persecución delictual.

Aún más, la mayor parte de los sistemas judiciales nacionales cuentan con sistemas de policía judicial, o bien institutos, direcciones, departamentos u organismos de investigación forense, dependientes de las Fiscalías o Procuraciones Generales. Es decir, propios e independientes del poder político.

Entre las funciones de estas organizaciones auxiliares se encuentran la realización de determinaciones de laboratorio, tales como pruebas toxicológicas y médicas, que resultan esenciales para acreditar los hechos de contaminación, degradación o afectación de recursos ambientales.

Un paso más adelante en el punto, podemos ver que las fiscalías de Paraguay, Perú, Costa Rica, Honduras, Venezuela y algunos Estados de Brasil, poseen una dotación de auxiliares a la

investigación ambiental forense, con recursos técnico-científicos con preparación y cometidos específicamente ambientales.

Cerrando el segundo tema entonces, resulta confirmatorio el potencial que tienen estas organizaciones del sistema judicial para abarcar con recursos técnicos y jurídicos la problemática ambiental con una eficiencia comparativa a otros apreciable.

5.2. Ambitos Jurídicos de Competencia Ambiental presentes en Latinoamérica:

Todos los países latinoamericanos abordados tienen un sistema normativo ambiental sumamente desarrollado. Presentan desde su base, en sus Constituciones Políticas, artículos dirigidos a garantizar la protección de los derechos ambientales de sus ciudadanos.

Sobresalen los textos de Guatemala, Colombia, República Dominicana y Ecuador, por tener un conjunto de artículos referidos a varios y distintos aspectos de la materia ecológica. Esta última nación, además, en su Constitución reconoce y regula a “La Pacha Mama” o “Madre Naturaleza” especialmente.

Para caracterizar las expresiones normativas esenciales de los países, se enfrentó el desafío de, proponiendo pocas preguntas, conocer sistemas comparados disímiles, de una manera certera y a la vez sencilla y armónicamente. Que las respuestas sirvan para comparar constructivamente.

Entre los insumos que se utilizó para cimentar el trabajo exploratorio, se recurrió a los derechos de acceso plasmados en el principio 10 de la Convención de Río de 1992, amalgamados en las directrices de información, participación y acceso a justicia ambiental, que impone que, estas deben ser públicas y socialmente extendidas. Se solicitó identifiquen estos tres principios en su derecho ambiental.

Otros tres principios elementales vistos son los de precaución, prevención y responsabilidad del contaminador. Tienen un efecto armonizador e instrumental contundente.

Es decir que, combinando las tres directrices de acceso con las tres con énfasis aplicativo, y enfocando problemas puntuales, proyectamos que podríamos saber cuánto brinda cada derecho nacional para resolverlos robustamente. Por ello, verificar la vigencia o no de estos seis soportes en cada esquema de país, es un punto sobre el que se trabajó decididamente.

Podemos aseverar que todos los países latinoamericanos cuentan con normas dirigidas a asegurar la vigencia de los 6 principios ambientales antes mencionados, salvando alguna omisión puntualizada en los informes mexicano y guatemalteco (ver Figura 5).

País /Principio	Información	Participación	Justicia	Precaución	Prevención	Responsabilidad
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colombia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El Salvador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guatemala				✓		✓
Honduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
México	✓					✓
Panamá	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paraguay	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perú	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerto Rico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
República Dominicana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uruguay	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Venezuela	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Figura 5
REGULACION NORMATIVA DE LOS PRINCIPIOS AMBIENTALES ESENCIALES POR PAÍS

Por otro lado, los trabajos de encuesta muestran que los marcos normativos básicos detallados, por país, se estructuran en uno o más textos legales esenciales, sin el recurso de Códigos o leyes totalizadoras.

Algunos derechos están basados en los artículos constitucionales más que como pivote como regulación operativa -por ser muy generosos y detallistas- y otros, posados en cláusulas políticas breves, desarrollan leyes generales u orgánicas.

Todos pasan luego a textos de regulación sectorial, referidos a los recursos naturales (flora, fauna, agua, aire, suelo), culturales (patrimonios arqueológicos, arquitectónicos, paisajísticos), elementos caracterizados de impacto (sustancias químicas y residuos) y sistemas de gestión ambiental (ordenamiento territorial y áreas y especies bajo estatus de protección especializados).

En lo que más nos interesa transmitir, y salvo Uruguay que dijimos se encuentra en proceso de sancionar su legislación penal ambiental, todo el resto de naciones latinoamericanas tiene previsto un sistema de responsabilidad penal y administrativo para el reproche de los hechos ambientales negativos.

La regla de estos regímenes sectoriales es presentar definiciones muy especializadas, probablemente por influencia del principio de legalidad penal, lo que lleva a la existencia de

una cantidad de actividades negativas que reciben multas o sanciones, especialmente las dirigidas a los atentados contra especies nativas y la contaminación.

Para aclarar más el punto, la técnica legislativa no es conformar tipos generales que resuman varias conductas y sus consecuencias, sino, puntualizar conductas y características de afectación en cada recurso natural.

Pasando a otro plano, ya dijimos que sus Constituciones tienen previsiones para asegurar los derechos ambientales, por lo que, en todos los países, existen mecanismos procesales para garantizar su efectividad (de los cuestionarios solo nos queda una incógnita con Guatemala).

Entrando a la materia civil ambiental, y aunque todos los encuestados la caracterizan como todo un ámbito de protección ambiental por país, luego, al analizar cómo se desarrolla su uso frente a conflictos ambientales y en particular en el trabajo fiscal, su importancia no resulta tan exponencial, frente al derecho administrativo y penal. A modo de incógnita, podría revisarse si en esta caracterización influye que la mayoría de los expertos convocados son operadores mayoritariamente penales. No obstante, en comparación, cuando se ingresa en la especialización es creciente la tendencia a ver todos los instrumentos de protección de todos los ámbitos que la hagan posible, como venimos sosteniendo.

Como resumen, podemos decir que, en casi todos los países, los ámbitos jurídicos materiales de protección de los derechos ambientales abarcados son el Constitucional, el Administrativo, el Civil y el Penal, abarcando las áreas de acceso propuestas por Brañes en su texto (ver Figura 6).

País /Principio	Constitucional	Administrativa Extrajudicial	Administrativa Jurisdiccional	Civil	Penal
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓
Brasil	✓	✓		✓	✓
Chile	✓	✓			✓
Colombia	✓		✓	✓	✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador	✓	✓	✓	✓	✓
El Salvador	✓	✓	✓	✓	✓
Guatemala	✓				✓
Honduras	✓		✓	✓	✓
México	✓	✓	✓	✓	✓
Panamá	✓	✓	✓	✓	✓
Paraguay	✓	✓			✓
Perú	✓	✓	✓	✓	✓
Puerto Rico	✓	✓	✓	✓	✓
República Dominicana	✓	✓	✓	✓	✓
Uruguay	✓	✓	✓	✓	✓
Venezuela	✓	✓	✓	✓	✓

Figura 6

ÁMBITOS JURÍDICOS MATERIALES ABARCADOS POR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES POR PAIS

5.3. Instrumentos Jurídicos para la Protección Ambiental en Latinoamérica:

En este documento utilizamos el concepto de “instrumentos jurídicos” para describir la información obtenida sobre mecanismos previstos, en general, por las legislaciones nacionales para la protección ambiental en cada país.

Lo distinguimos de “herramientas jurídicas”, como término que usaremos al evaluar si las fiscalías están dotadas de estos “instrumentos” entre sus facultades de actuación. Están amalgamadas en una noción que, si la quisiésemos tomar con estrictez, serían de “competencias o atribuciones”.

No obstante, la búsqueda del proyecto es la ampliación permanente de las capacidades necesarias para la efectividad de la protección ambiental y no el corsé en la actuación. Claramente el rudimento de conflicto ambiental complejo nos interna en la idea de una actuación profesional especializada, es aglutinante de todas las posibilidades de abordaje al alcance. Como se dijo más arriba, con esto seguimos viendo en la figura del fiscal ambiental especializado que, en abstracto, presenta condiciones de base y operativas que abonan para una mayor protección ambiental. Esto, más allá de situaciones particulares y coyunturales que puedan inferirse en algún caso.

Se buscó también reflejar la tarea fiscal, comparativamente, ante casos concretos. Para eso se utilizó ejemplos de problemas ambientales paradigmáticos referidos a los derechos de acceso ambiental, en vínculo con los principios ambientales centrales para la teoría de la responsabilidad. Esto nos permite ver ante iguales supuestos, cual es la capacidad de respuesta del derecho nacional y luego, más adelante, con que capacidades cuenta la organización judicial en análisis.

Así se obtuvo los siguientes tópicos a indagar: negación de información ambiental, negación de la participación ciudadana en licenciamientos administrativos, incertidumbre de riesgo de daños ambientales, incumplimiento de medidas de prevención administrativa, y los casos de daños ambientales consumados. Sobre ellos, se verificó los instrumentos legales para resolverlos por país utilizando como molde las figuras previstas en los códigos modelo para Iberoamérica: la reclamación administrativa, la acción contencioso-administrativa, la acción constitucional, la acción civil y la acción penal.

En los resultados de la exploración tenemos que todos los países ofrecen en sus sistemas normativos respuestas administrativas y, en la mayoría, las consecuentes vías de reclamo o revisión jurisdiccional de dichas resoluciones (denominadas acá “lo contencioso-administrativo”).

Vamos a adelantar acá una sospecha exploratoria: este instrumental normativo de protección, como veremos, casi no puede ser usado como herramienta por la mayoría de las fiscalías que tienen una conformación clásica y exclusivamente criminal.

Por otra parte, la vertiente de protección constitucional (tales como el amparo, o por caso, la acción de tutela del derecho colombiano) también se halla presente en la mayoría de los marcos normativos de los países hispanoparlantes de la región. Otra vez debe aclararse que no todos los procuradores del ambiente van a poder ejercitarlas en defensa de sus casos, como veremos en detalle más adelante.

La otra vía de protección es la penal. Esta sí está difundida en casi la totalidad de la región. Pero aquí sí se evidencia disparidades respecto a la cantidad y profundidad de las construcciones legales nacionales. Mientras países como Argentina, Chile y Uruguay tienen una muy escasa o inexistente regulación general, países como Panamá, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Brasil, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Guatemala, ofrecen un amplio abanico de

conductas negativas captadas por el derecho criminal de sus países, enriqueciendo el accionar fiscal.

El ámbito menos difundido es el derecho civil, pues pocos países han hecho de este una forma de respuesta a la degradación del entorno, recurriendo a los anteriores medios de procesar casos. El sistema más desarrollado, por antonomasia, es el de la acción civil pública brasilera. Muestra una gran robustez para procesar casos de tutela preventiva como reparativa, y sostener en sus estrategias judiciales formas colectivas e individuales de solución de conflictos. La reciente reforma civil argentina, expone un fiscal consultado de este país, ha perfeccionado un modelo mas acabado de reparación de derechos de incidencia colectiva que abarca lo ambiental, aunque luego no da cuenta de medios procesales que permitan su ejercicio en los Tribunales.

Problema / País	Negación Información					Negación Participación					Incertidumbre Riesgo					Incumplimientos Prevención					Daño Ambiental Consumado				
	RAd	CoA	Con	Cvl	Pnl	RAd	CoA	Con	Cvl	Pnl	RAd	CoA	Con	Cvl	Pnl	RAd	CoA	Con	Cvl	Pnl	RAd	CoA	Con	Cvl	Pnl
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓
Brasil	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Chile	✓					✓					✓					✓					✓			✓	
Colombia	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
El Salvador	✓		✓	✓	✓	✓					✓			✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓
Guatemala																					✓		✓		✓
Honduras	✓		✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓
México					✓											✓				✓	✓			✓	✓
Panamá	✓	✓	✓																		✓	✓		✓	✓
Paraguay	✓	✓			✓	✓				✓					✓	✓				✓					✓
Perú			✓								✓				✓	✓				✓	✓			✓	✓
Puerto Rico	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Rep. Dominic.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Uruguay	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓			✓		✓			✓		✓			✓	✓
Venezuela	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				✓					✓					✓

Ref: Reclamación Administrativa(Rad) - Acción Contencioso-Administrativa [CoA] - Acción Constitucional [Con]
Acción Civil [Cvl] - Acción Penal [Pnl]

Figura 7

RESPUESTAS INSTRUMENTALES ANTE AFECTACIONES A CONFLICTOS AMBIENTALES PARADIGMÁTICOS POR PAIS

En la Figura 7 se puede observar resumidamente las respuestas de cada país sobre los instrumentos que tienen previstos para atender los problemas emblemáticos propuestos para analizar.

Para concluir el punto, cabe reseñar la reciente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de México, instrumenta un sistema legal que pretende responder con unicidad a la problemática ecológica del país. Cabe abrir una indagación sobre cuanta efectividad les brinda como herramienta a sus operadores ambientales del sistema judicial.

5.4. Sistema de Responsabilidad Jurídica para la Protección Ambiental en Latinoamérica:

En este punto nos disponemos a exponer las previsiones normativas detectadas en los sistemas de responsabilidad de los países consultados, mostrando con mayor detalle lo relativo a los bienes o elementos ambientales en juego. Lo que se denomina comúnmente como regulación sectorial ambiental.

Abordamos como tópicos de encuesta la Flora, Fauna, Suelo, Agua, Aire, Químicos y Desechos Industriales, Residuos Domiciliarios, Ordenamiento Territorial y Áreas Protegidas y Patrimonio Cultural. Sobre ello preguntamos si obtienen respuesta mediante una sanción administrativa o una reparación civil o condena penal, en razón de conocer primero los instrumentos.

Entrando en las respuestas, con alguna excepción (Guatemala), todos los países exponen un sistema administrativo sancionatorio para dar respuesta a estas afectaciones. Es decir que este ámbito esta sumamente desarrollado en la región.

En segundo orden, el ámbito penal también recoge casi todas las problemáticas sectoriales y las criminaliza para la protección. Resaltamos acá la debilidad, por exiguo, del sistema argentino y, por estar recién en vías de desarrollo, en Uruguay.

La tercera consulta en el abordaje sectorial fue dirigida al sector civil, que ya vimos es el menos robusto en la América del Sur. Naciones como Panamá, Venezuela y Paraguay no han previsto según los expertos encuestados un canal de acceso diferenciado a la justicia civil por casos ambientales.

Creemos entender que las condiciones para afrontar el pleito colectivo de interés público subjetivo que concita el caso ambiental, requiere una profundización normativa e institucional de caracteres que exceden los canales del derecho privado y sus procesos en clave tradicional. Esto puede haber llevado a informar a varios expertos que sus sistemas comparados no prevén normas al respecto.

Como se ve en la Figura 8, comparativamente con el penal y administrativo, los consultados entienden que este ámbito es el que menos se ha desarrollado para la función de protección ambiental en la región. Aún así, y al revisar el caso de las fiscalías especializadas, veremos que en ciertos países profundizan sus esfuerzos para buscar en la vía civil en sede penal, la introducción de medidas cautelares y pretensiones reparatorias para intentar solucionar el impedimento y cumplir sus cometidos.

Bien / País	Flora			Fauna			Suelo			Agua			Aire		
	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Brasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chile	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Colombia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El Salvador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
Guatemala	✓		✓	✓		✓			✓			✓			✓
Honduras			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
México	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panamá	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
Paraguay	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓
Perú	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pto. Rico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rep. Dom.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uruguay	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Venezuela	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓

Refs.: Sanción Administrativa [Adm] - Reparación Civil [Cvl] - Condena Penal [Pnl]

Problema / País	Químicos y Desechos			Residuos Domiciliarios			Ordenamiento Territorial			Patrimonio Cultural		
	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Brasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colombia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
El Salvador			✓			✓			✓			✓
Guatemala			✓			✓			✓			✓
Honduras		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
México	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
Panamá	✓		✓	✓		✓	✓		✓			✓
Paraguay	✓		✓	✓		✓	✓		✓			
Perú		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
Puerto Rico	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	
Rep. Dom.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uruguay	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Venezuela	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓

Refs.: Sanción Administrativa [Adm] - Reparación Civil [Cvl] - Condena Penal [Pnl]

Figura 8
RESPUESTAS INSTRUMENTALES ANTE AFECTACIONES A BIENES Y PROBLEMÁTICAS SECTORIALES AMBIENTALES POR PAÍS

5.5. Mecanismos de acceso a Justicia Ambiental en Latinoamérica:

El Acceso a la Justicia fue definido como una de las cinco áreas claves para las Democracias de la Región (esto se dijo en las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de los Estados de la Región - Canadá 2002 - México 2004; citado en “Acceso a la Justicia: realidades - tendencias y propuestas”; Cox U., Sebastián; ONG Forja; CEJA;
<http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3790/serieAccesoalaJusticia.pdf?sequence=1&isAllowed=ys>).

Dice este texto que es el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- quien lo define como “la posibilidad que debe tener toda persona de contar con una solución o remedio a sus problemas jurídicos sin importar si esas soluciones provienen de una oferta estatal o privada o si ellas son voluntarias, legales, judiciales y/o simplemente administrativas, y a condición de que asegure su oportunidad y calidad” (“Manual de Políticas Públicas de Acceso a la Justicia” – PNUD – Octubre 2005. Disponible en www.accesoalajusticia.cl).

Para conocer cuáles son los mecanismos de acceso que predisponen para la justicia ambiental los sistemas nacionales, primero se consultaron los instrumentos procesales fundamentales del sistema comparado de la región, obtenidos de la bibliografía de consulta. En este orden se preguntó sobre los institutos de la mediación o justicia restaurativa, conciliación, negociación y arbitraje (diferenciándolos en sede administrativa, civil y penal) y el principio de oportunidad penal. Luego se indagó sobre la legitimación habilitada en las acciones ambientales no penales que prevé cada sistema (entre las variantes de popular, colectiva, individual homogénea e individual). Y, finalmente, sobre los roles procesales penales eventuales de acusador público (fiscal), querellante criminal adhesivo, querellante criminal exclusivo, actor civil popular, actor civil colectivo, actor civil individual y tercero civilmente demandado.

Los resultados muestran que, mientras el arbitraje ambiental no lo contempla prácticamente ninguna legislación, casi todos los fiscales cuentan con el principio de oportunidad reglado. La excepción es Brasil, que raramente no lo tiene, pero ofrece como paliativo el uso del principio de la insignificancia o bagatela, para evitar el desgaste de la persecución de actos menores.

Entre las otras formas de resolución alterna de conflictos consultada, la mediación se encuentra presente en la mayoría de los regímenes y la conciliación, con predominancia en la sede penal, tiene regulación generalizada también.

La negociación se halla presente en varios países y es vinculada, en casos como el de Costa Rica a la acción civil, y al instituto penal de la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado donde prima el sistema acusatorio.

La Figura 9 muestra, comparativamente, los instrumentos emblemáticos de acceso a justicia ambiental disponibles, según los expertos, por país.

Problema / País	Mediación			Conciliación			Negociación			Arbitraje		
	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl
Argentina		✓	✓			✓						
Brasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Chile				✓	✓							
Colombia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Costa Rica			✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Ecuador						✓			✓			
El Salvador						✓			✓			
Guatemala												
Honduras	✓			✓		✓			✓			
México			✓						✓			✓
Panamá												
Paraguay												
Perú	✓			✓								
Pto. Rico												
Rep. Dom.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
Uruguay												
Venezuela			✓									

Problema/ País	Principio Oportunidad Penal	Habilitación Procesal Penal						Legitimación J.No Penal			
		Fiscal	QAdh	QExc	ACvP	ACvC	ACvI	Pop	Clva	InHo	Ind
Argentina	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	
Brasil		✓	✓					✓	✓	✓	✓
Chile	✓	✓					✓	✓			✓
Colombia	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓
Costa Rica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
El Salvador	✓	✓	✓						✓		✓
Guatemala	✓	✓	✓								
Honduras	✓	✓									
México	✓	✓		✓							
Panamá	✓	✓	✓	✓							
Paraguay	✓	✓	✓								
Perú	✓							✓			
Puerto Rico		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓
Rep. Dom.	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
Uruguay											
Venezuela		✓						✓	✓		✓

Ref.: Administrativa [Adm] - Civil [Cvl] - Penal [Pnl] Acusador Público [Fiscal] - Querellante Criminal Adhesivo [QAdh] - Querellante Criminal Exclusivo [QExc] - Actor Civil Popular [ACvP] - Actor Civil Colectivo [ACvC] - Actor Civil [ACvI] Popular [Pop] – Colectiva [Clva] - Individual Homogénea [IndH] - Individual [Ind] –

Figura 9
INSTRUMENTOS DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL DISPONIBLES POR PAIS

5.6. Incentivos de acceso a Justicia Ambiental para Grupos Vulnerables en Latinoamérica:

Las 100 Reglas de Brasilia, es el instrumento regional caracterizado para la protección de los derechos de acceso a la justicia de sectores vulnerables, al cual recurrimos para caracterizar grupos desaventajados en dirección a las garantías jurídicas ambientales.

En función de sus previsiones, se consultó sobre las regulaciones particulares de protección de los derechos ambientales de niños, niñas y adolescentes, discapacitados físicos, discapacitados mentales, comunidades indígenas, víctimas penales, refugiados, inmigrantes y migrantes forzados, pobres, mujeres y minorías étnicas, religiosas y/o sexuales.

A comparación del desarrollo y puntualidad en los informes respecto a los bienes ambientales sectoriales, la protección de estos sujetos no muestra tanto perfeccionamiento en los expertos. Es un punto a enfocar en futuros esfuerzos de mejora.

Casi todos los países prevén regulación constitucional o legal de base para estos sectores sociales, pero en la materia ambiental, solo dos son los ítems muy resaltados por los consultados. El primero, relativo a la posición jurídica de las comunidades indígenas en los pleitos ambientales.

Segundo, el tópico de las víctimas en el proceso penal, lo cual no deja de mostrar un abordaje paritario de cualquier afectado, mas allá de su condición social, en vínculo con el proceso penal. Lo útil de la detección de estos expertos, es que las víctimas penales concentran un interés ambiental que puede concurrir y coadyuvar a sostener la pretensión colectiva social de reparación ambiental. Si el fiscal la visualiza y canaliza, puede contener y conducir legítimos reclamos con mayor legitimidad.

Es que, en los casos de este tipo de defensa social especial para sectores de vulnerables, se pone en juego también la actividad de otros organismos especializados como las Defensorías del Pueblo u Ombudsman, sistemas de la Defensa judicial oficial o gratuita o fiscalías temáticas de derechos humanos. Será un desafío vehiculizar estas distintas instancias de actuación simultánea, que responden a distintas competencias de base.

Un caso paradigmático es la regulación de República Dominicana, en orden a la habilitación de las Organizaciones No Gubernamentales para la defensa de derechos sociales sectoriales ambientales, como los que en este punto están en juego. Estas legitimaciones plurales no solo se las prevé en el orden contencioso-administrativo y los procesos civiles sino también en los casos penales ambientales.

Veremos al llegar a las herramientas fiscales, cómo el acento en las víctimas penales descrito, se vincula con la legitimación de los acusadores públicos para su protección.

5.7. Herramientas de Litigación fiscal para la protección ambiental en Latinoamérica:

Entrando a las herramientas con que, los expertos muestran, están dotadas las fiscalías de América latina para resolver la degradación ambiental, empecemos el recorrido diciendo que es la fuerte influencia de su sesgo penalista de origen clásico la que domina la escena regional.

Para comparar los instrumentos manifestados al responder preguntas previas, con las herramientas con que en concreto se halla dotada cada fiscalía para atender los problemas emblemáticos que elegimos para examinar comparativamente, pedimos a los consultados que puestos frente a los supuestos que preparamos de: negación de información y participación ciudadanas, inactividad ante incertidumbre de riesgo de daños ambientales, incumplimientos de medidas de prevención administrativas o consumación de daños ambientales, expongan qué

herramientas de reclamación administrativa, acción contencioso-administrativa, acción constitucional, acción civil o acción penal tienen. Los resultados generales comparados se exponen en la Figura 10.

Problema /País	Negación Información					Negación Participación					Incertidumbre Riesgo					Incumplimientos Prevención					Daño Ambiental Consumado				
	RAd	CoA	Con	CvI	PnI	RAd	CoA	Con	CvI	PnI	RAd	CoA	Con	CvI	PnI	RAd	CoA	Con	CvI	PnI	RAd	CoA	Con	CvI	PnI
Argentina	✓				✓	✓				✓															✓
Brasil	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓
Chile																									
Colombia															✓				✓						✓
Costa Rica			✓		✓	✓	✓	✓					✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecuador			✓					✓							✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓
El Salvador																									
Guatemala					✓											✓									
Honduras																✓				✓					✓
México			✓			✓				✓						✓				✓	✓			✓	✓
Panamá					✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓
Paraguay					✓					✓					✓					✓					✓
Perú					✓					✓					✓					✓					✓
Puerto Rico					✓						✓					✓						✓			✓
Rep. Dom.	✓	✓	✓		✓			✓	✓						✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
Uruguay																									
Venezuela					✓					✓					✓					✓					✓

Ref.: Reclamación Administrativa [RAd] - Acción Contencioso-Administrativa [CoA] - Acción Constitucional [Con] - Acción Civil [CvI] - Acción Penal [PnI]

Figura 10

HERRAMIENTAS FISCALES ANTE CONFLICTOS AMBIENTALES PARADIGMÁTICOS DISPONIBLES POR PAIS

La primera impresión es obvia: existen más instrumentos disponibles que herramientas asignadas.

Se sabe que la criminalidad ambiental incipiente, puede ser detectada y corregida de manera preventiva con mecanismos anteriores al reproche penal, que por supuesto, al final de cuentas, no debe faltar. La prevención es la regla de oro ambiental.

Una intervención administrativa a tiempo puede evitar peligros de desviaciones o prevaricatos ambientales. Una intervención precautoria puede propiciar la evitación de males mayores con la ralentización y pedido de mayor certidumbre técnica en el trámite habilitante del Estado. Así también, la profundización de la información y participación social, respecto de los temores comunes a los riesgos, configuran una licencia social más potente en la ciudadanía que justifica el poder exigirse su cumplimiento judicial. Las fiscalías temáticas brasileras, por ejemplo, pueden hacerlo.

Al ver los “instrumentos jurídicos” con que dota cada derecho nacional a su protección ambiental, evaluamos que el máximo nivel se dirige a los bienes o problemas sectoriales ambientales (fauna, suelo, agua, mala gestión de residuos o sustancias contaminantes) producto del sesgo sancionatorio que -dijimos- tiene esta legislación. Por ello, resulta lógico que las “herramientas” provistas a las fiscalías para la atención ambiental estén más concentradas allí (ver Figura 11).

Problema / País	Flora					Fauna					Suelo					Agua					Aire				
	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P
Argentina					✓	✓				✓					✓					✓	✓	✓		✓	✓
Brasil	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Chile										✓															
Colombia					✓					✓					✓					✓					✓
Costa Rica				✓	✓				✓	✓				✓	✓				✓	✓				✓	✓
Ecuador	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓
El Salvador																									
Guatemala																									
Honduras					✓					✓					✓					✓					✓
México	✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓
Panamá					✓					✓					✓					✓					✓
Paraguay					✓					✓					✓					✓					✓
Perú					✓					✓					✓					✓					✓
Pto. Rico					✓					✓					✓					✓					✓
Rep. Dom.			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
Uruguay																									
Venezuela					✓					✓					✓					✓					✓

Problema/ País	Químicos y Desechos					Residuos Domiciliarios					Ordenamiento Territorial					Patrimonio Cultura				
	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P	A	C	Cn	Cl	P
Argentina					✓	✓				✓	✓				✓	✓				✓
Brasil	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Chile																				
Colombia					✓					✓					✓					✓
Costa Rica				✓	✓				✓	✓				✓	✓				✓	✓
Ecuador	✓			✓	✓						✓			✓	✓					✓
El Salvador						✓				✓										
Guatemala																				
Honduras					✓					✓										
México	✓		✓		✓						✓		✓		✓	✓		✓		✓
Panamá					✓					✓					✓					✓
Paraguay					✓					✓					✓					✓
Perú					✓					✓					✓					✓
Puerto Rico					✓					✓					✓					✓
Rep. Dom.			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
Uruguay																				
Venezuela					✓					✓					✓					✓

Ref.: Reclamación Administrativa [A] - Acción Contencioso-Administrativa [C] - Acción Constitucional [Cn] - Acción Civil [Cl] - Acción Penal [P]

Figura 11

HERRAMIENTAS FISCALES ANTE AFECTACIONES A BIENES Y PROBLEMÁTICAS SECTORIALES AMBIENTALES CARACTERIZADAS POR PAÍS

Esta normativa criminal, “atomizada por bienes”, como es el modo detectado de este sector jurídico, no impide hacer un análisis superador. Esta tendencia no le termina de negar a la actuación fiscal interesarse sobre algunos supuestos de “problemas paradigmáticos” de enfoque ambiental de naturaleza extrapenal (por ejemplo, negación de información o

incumplimiento de medidas preventivas administrativas de la habilitación, que escaparían a la noción de “bienes ambientales” a la que recurre el sistema sancionatorio).

Afirmamos esto, exponiendo un ejemplo como el de Venezuela, cuyo experto informa que en ese país existe y utilizan una previsión procesal “precautelar” penal para la materia ambiental. En pocas palabras, por la vía de esta herramienta normativa, en tanto los problemas paradigmáticos dirijan su curso contra bienes ambientales, en la etapa de investigación delictual podría usar la herramienta procesal especializada para atender problemas paradigmáticos. En las respuestas de su cuestionario, propone imponerlas para, por ejemplo, evitar el desarrollo de una actividad bajo incertidumbre de posibles daños (en atención al principio precautorio y aplicando un instrumento precautorio), que pueden consumarse si no se toma las medidas del caso.

Pensamos que sería una suerte de tutela inhibitoria o medida precautoria articulada en la vía criminal y, por ello, más que excepcional. Lo lógico sería que estas medidas correspondieran a otra área del sistema de responsabilidad ambiental. Esto nos pone frente a dos conclusiones primarias. Primero, que, probablemente, la evidencia de las necesidades instrumentales ambientales ha propiciado que el legislador busque asignar competencias de pre-daño, aun forzando la lógica fiscal penal clásica, so pena de caer en modalidades impropias de la última ratio. Segundo, es posible también que la experiencia y especialización fiscal ambiental, a la larga, empuja el desarrollo de estrategias expansivas de los instrumentos procesales al alcance, para transformarlos en herramientas ambientales cada vez más efectivas y adaptadas, con el aval de una jurisprudencia de interpretación amplia y conformando nuevos esquemas en los protocolos de actuación fiscal.

Más coherente y recomendable, al fin de cuentas, es que la zona de intervención ante el ejemplo de las incertezas científicas, se atienda con herramientas propias de la responsabilidad administrativa o civil, como lo expone la legislación de Brasil, y concediendo estas potestades a las fiscalías para no forzar las garantías criminales.

5.8. Herramientas Jurídicas de Fiscales para proveer acceso a Justicia Ambiental en Latinoamérica:

Como último grupo de análisis primario de los resultados de las consultas, cabe empezar a mirar las herramientas con que cuentan las Fiscalías nacionales para el acceso a justicia ambiental. Es que en el trascurso del trámite del caso ambiental cada procurador público tiene actualmente en sus manos distintas posibilidades de solución alternativa a la sentencia judicial. Todos los fiscales exponen, lógicamente, que su actuación procesal penal se corresponde con el rol de acusador público. Pero lo que llama más la atención es ver qué otro tipo de legitimaciones, en sede penal, se les pueden asignar en sus reglamentaciones procesales ante un conflicto ambiental: como un actor civil público colectivo o un actor civil público individual, para introducir pretensiones preventivas o reparadoras del daño ambiental, consecuencia del delito.

Además, la consulta de detección de herramientas procesales se extiende a las facultades de mediación, conciliación, negociación, arbitraje y el uso del principio de oportunidad con que esté dotado en sus reglamentaciones nacionales.

Sobre esta última facultad, ampliamente difundida en la región como expusimos antes de ahora, también nos parece importante saber no solo si está presente el instituto, sino la

posibilidad de ejercitarlo en todos los casos de delitos ambientales, o se restringe a delitos leves. La Figura 12 muestra las respuestas de manera concisa.

Como era de presuponer, con todo el desarrollo de la exploración que vamos contando, las facultades de solución alternativa que se constatan son sólo propias del ámbito penal, tales como la conciliación y la negociación, y en menor medida la mediación con un tercero imparcial.

Solo en los países en los que se consignó una competencia de actuación más allá de la penal (legitimación extraordinaria fiscal), estos funcionarios acusadores ejercitan reclamaciones de base popular, colectiva o individual homogénea, o bien reclamos por derechos individuales. La gran mayoría no tiene esta habilitación en sus atribuciones y por tanto encuentra una imposibilidad de usar estas herramientas. Insistiremos por última vez, Brasil es la configuración orgánica más elocuente de disposición de este tipo de herramientas para proteger el entorno.

Para cerrar el pantallazo, es la acción civil en sede penal, en tanto encierre pretensiones ambientales reparatorias, la gran incógnita, pero a su vez el gran desafío próximo y cercano de las fiscalías ambientales especializadas. Les ofrece la posibilidad de asumir la pretensión colectiva de mejorar el ambiente, combinado con las medidas cautelares y los principios interpretativos del sistema jurídico ambiental: es una oportunidad de desarrollo de la tarea de representación de los intereses generales ambientales, más allá de la acusación criminal, de la sociedad que los fiscales no pueden desechar.

Problema / País	Mediación			Conciliación			Negociación			Arbitraje		
	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl	Adm	Cvl	Pnl
Argentina			√			√						
Brasil	√	√		√	√		√	√	√			
Chile												
Colombia			√						√			
Costa Rica		√	√			√			√			
Ecuador			√			√			√			
El Salvador												
Guatemala												
Honduras						√			√			
México												
Panamá									√			
Paraguay			√			√			√			
Perú												
Pto. Rico			√	√			√					
Rep. Dom.	√	√	√	√	√	√		√	√			
Uruguay												
Venezuela	√		√	√		√	√		√	√		√

Ref.: Administrativa [Adm] - Civil [Cvl] - Penal [Pnl] Acusador Público [Fiscal] - Querellante Criminal Adhesivo [QAdh] - Querellante Criminal Exclusivo [QEx] - Actor Civil Popular [ACvP] - Actor Civil Colectivo [ACvC] - Actor Civil [ACvI] Popular [Pop] - Colectiva [Clva] - Individual Homogénea [IndH] - Individual [Ind]

Problema/ País	Principio Oportunidad Penal	Habilitación Procesal Penal						Legitimación J. No Penal			
		Fiscal	QAdh	QExc	ACvIP	ACvC	ACvI	Pop	Clva	InHo	Ind
Argentina	✓	✓									
Brasil	Insignificanci	✓							✓	✓	✓
Chile	✓	✓									
Colombia	Todo delito	✓									
Costa Rica	Leves	✓									
Ecuador	Leves	✓									
El Salvador											
Guatemala	Leves	✓									
Honduras	Leves	✓									
México	Leves	✓									
Panamá	✓	✓									
Paraguay	Leves	✓									
Perú	Leves	✓									
Puerto Rico	Leves	✓									
Rep. Dom.	Leves	✓	✓				✓		✓		
Uruguay		✓									
Venezuela		✓		✓							

Ref.: Administrativa [Adm] - Civil [Cvl] - Penal [Pnl] Acusador Público [Fiscal] - Querellante Criminal Adhesivo [QAdh] - Querellante Criminal Exclusivo [QExc] - Actor Civil Popular [ACvP] - Actor Civil Colectivo [ACvC] - Actor Civil [ACvI] Popular [Pop] – Colectiva [Clva] - Individual Homogénea [IndH] - Individual [Ind]

Figura 12
HERRAMIENTAS FISCALES DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL POR PAIS

6. CONCLUSIONES: FORTALECER EL SISTEMA FISCAL AMBIENTAL ESPECIALIZADO LATINOAMERICANO:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO AMBIENTAL
SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL COMPLEJOS (CUATRIDIMENSIONALES: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL Y PENAL)
PREDOMINANCIA DEL ÉNFASIS SANCIONATORIO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
FORTALEZAS INSTITUCIONALES DE BASE: ELEGIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN FISCAL PARA LO AMBIENTAL
RELEVANCIA FISCAL EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL
POCO DESARROLLO DE HERRAMIENTAS FISCALES DEL ÁMBITO CIVIL PARA LA PREVENCIÓN Y REPARACIÓN AMBIENTAL
VOCACIÓN FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENDER LA INTEGRALIDAD DEL CONFLICTO AMBIENTAL
OPORTUNIDAD EN LOS AVANCES OBTENIDOS CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS CAUTELARES Y ACCIÓN CIVIL EN SEDE PENAL
PROPUESTA DE LITIGACIÓN ESTRATÉGICA CONCERTADA POR MIEMBROS DE LA REDLMPA PARA PROFUNDIZAR LA ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES DE INTERÉS PÚBLICO
RECOMENDACIÓN A PNUMA DE PROPENDER A INCENTIVAR LA GENERALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL ESPECIALIZADA E INTEGRAL EN LAS NACIONES

Figura 13

- El conflicto ambiental es un problema complejo. Prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos los aborda echando mano a su Constitución y normas administrativas, civiles y penales, para hacerles frente.
- Todos los países latinoamericanos, sin excepción, han dotado de competencias ambientales a sus organizaciones fiscales.
- El sector judicial fiscal tiene, como fortaleza de base, haber alcanzado un gran desarrollo técnico-jurídico y experiencia en la tarea investigativa, producto del tiempo insumido en su trabajo primordial de acusación penal.
- Casi la totalidad de las fiscalías de los países latinoamericanos tienen, en primera medida, la colaboración de las policías administrativas para actuación contra el crimen. Estas poseen distintas denominaciones (Policía, Gendarmería, Carabineros, Policía Militar, etc.), y en muchos casos, incluyen a su vez institutos o departamentos forenses que realizan la actividad científica de asesoramiento a la persecución delictual.

- Algunos ministerios fiscales latinoamericanos con competencia ambiental cuentan con auxiliares para la investigación ambiental forense, dotados de recursos técnico-científicos con preparación y cometidos específicamente ambientales.
- Enfocando problemas como el comercio ilegal de fauna o la contaminación con desechos, vemos que la intención de los países latinoamericanos está decididamente dirigida a encargar a los fiscales su atención y respuesta.
- Todos los países latinoamericanos abordados tienen un sistema normativo ambiental sumamente desarrollad, conformando un sistema de responsabilización ambiental preventivo y reparatorio.
- En casi todos los países latinoamericanos los ámbitos jurídicos materiales de protección de los derechos ambientales abarcados son el Constitucional, el Administrativo, el Civil y el Penal.
- La gran parte de las naciones latinoamericanas tiene previsto específicamente un sistema de responsabilidad penal y administrativo para el reproche de los hechos ambientales negativos, lo que muestra un sesgo de tinte sancionatorio en la región.
- La regla de los regímenes normativos de responsabilidad ambiental latinoamericanos es presentar definiciones muy especializadas, que recogen casi todas las problemáticas de manera sectorial (flora, fauna, suelo, agua, aire, químicos y desechos industriales, residuos domiciliarios, ordenamiento territorial y áreas protegidas y patrimonio cultural).
- La virtud del sistema de responsabilidad ambiental de sesgo sancionatorio es la efectividad de su reproche punitivo y el desaliento social de las conductas degradantes, y su inconveniente es la dificultad de efectivizar resultados preventivos y reparativos, fin último del sistema.
- El ámbito menos difundido de protección ambiental en Latinoamérica según los fiscales encuestados es el derecho civil. El sistema más desarrollado al respecto, por antonomasia, es el de la acción civil pública brasilera.
- Los obstáculos para usar el instrumento civil, es que requiere una profundización normativa e institucional de caracteres que exceden los canales del derecho privado y los procesos tradicionales.
- La reciente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de México, instrumenta un sistema legal que pretende responder con unicidad a la problemática ecológica del país.
- Entre las formas de solución alternativa de conflictos, se encuentra presente en la mayoría de los regímenes la mediación y la conciliación, y esta última tiene predominancia en la sede penal.
- Casi todos los fiscales de la región cuentan con el principio de oportunidad reglado penal, aunque en su gran mayoría puede ser utilizado frente a delitos ambientales leves.

- Producto de la orientación sancionatoria que tiene esta legislación, resulta correcto que las herramientas provistas a las fiscalías para la atención ambiental estén más concentradas en las competencias penales.
- En las fiscalías especializadas, aún las de competencia criminal exclusiva, también se observa una intención de avanzar en las acciones civiles de reparación en la sede penal y perfeccionar el uso de las medidas cautelares, que al final del día repercuten en los aspectos no penales del conflicto ambiental.
- El trabajo en unidades fiscales especializadas tiende a la conformación de una vocación de unicidad en la materia. Esto permite, por un lado, conjugar los ámbitos instrumentales normativos de manera coordinada y coadyuvante para la protección. Por otro lado, permite sostener una sola teoría del caso o conflicto ambiental en las pretensiones, lo cual mejora la efectividad de las herramientas jurisdiccionales.
- El sistema de responsabilidad ambiental parece desarrollarse más en las naciones con fiscalías ambientales especializadas, que permite pensar que debe fortalecerse el movimiento de creación en avance, como se propone Uruguay.
- La experiencia y especialización fiscal ambiental permite desarrollar estrategias con los instrumentos procesales al alcance, para transformarlas en herramientas ambientales.
- Las víctimas del proceso penal ambiental concentran un interés que concurre a sostener la pretensión colectiva social de reparación, que el fiscal puede contener y conducir.
- Algunos expertos muestran que algunas fiscalías ambientales especializadas latinoamericanas invocan otro tipo de legitimaciones (extraordinarias) en sede penal, que les habilite a introducir pretensiones preventivas o reparatorias del daño ambiental a consecuencia del delito, a modo de un actor civil público colectivo.
- La acción civil en sede penal, en tanto encierre pretensiones ambientales reparatorias, otorga la posibilidad a las fiscalías latinoamericanas de asumir la pretensión colectiva de mejorar, preventiva o restaurativamente, el ambiente.
- Combinando la pretensión preventiva ambiental con las medidas cautelares y los principios interpretativos del sistema jurídico ambiental, se configura una primera oportunidad de desarrollo de la tarea de representación de los intereses generales ambientales de la sociedad, que los fiscales latinoamericanos no pueden desechar.
- Los miembros de la RedLMPA pueden evaluar realizar una litigación estratégica de sus casos ambientales en sede penal en sus países, introduciendo pretensiones civiles reparatorias para buscar acaparar la integralidad del conflicto de interés público, concertando, colaborando y compartiendo los argumentos, errores y logros para implementar una modalidad más profunda de litigación de los casos de protección ambiental.
- Las acciones de incidencia del PNUMA, sobre foros de tomadores de decisión con influencia en los contextos normativos nacionales, debe propender a incentivar la generalización de la

organización fiscal ambiental especializada, dotada de amplias competencias técnicas y jurídicas para el acceso a justicia de los derechos ambientales ciudadanos, como una forma de robustecer la protección ambiental en el continente.

7. AGRADECIMIENTOS:

A la Oficina Regional para América Latina y el Caribe / O.N.U, por la confianza depositada en mí.

Muy especialmente a ANDREA BRUSCO, Oficial Legal de Gobernanza Ambiental del PNUMA, por bregar por la protección ambiental de nuestro bello continente y su vocacional esfuerzo y paciencia con esta tarea.

A SILVIA CAPELLI, 10^a Procuradora de Justicia Criminal de Río Grande do Sul de Brasil, por estar siempre al frente de la idea de progreso de lo fiscal ambiental en la región.

A BLAS MATÍAS MICHENZI, Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la UFEMA de Argentina, por toda esa bienintencionada colaboración con el proyecto.

A los MIEMBROS DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS LATINOAMERICANOS que trabajaron directa y generosamente en el proyecto NOMBRADOS A CONTINUACION (ver Figura 3).

Además, a:

MARTINA DEMARCO, de la Oficina Regional de PNUMA, por gestionar todos esos detalles que hacen siempre falta para que las cosas salgan.

DAILU RIVERA DÍAZ de la Oficina del Jefe de los Fiscales Puerto Rico, por su apertura a la colaboración.

RUTH MORCILLO SAAVEDRA Fiscal Anticorrupción de Panamá, por sus aportes.

YARINA GERZENOVITZ, Secretaria de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental Argentina, por sus gestiones.

PATRICIA RIZO CABRERA, de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de Cuba.

MIGDALIA OSORIO, Fiscal Auxiliar de la Unidad Especializada Contra los Delitos de la Delincuencia Organizada de Nicaragua.

8. ANEXOS:

8.1. Anexo I - BIBLIOGRAFIA

- OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Acceso a la justicia ambiental en la región (http://www.pnuma.org/gobernanza/acceso_justicia.php).
- DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992
(http://www.pnuma.org/sociedad_civil/reunion2013/documentos/STAKEHOLDER%20PARTICIPATION/1992%20Declaraci%C3%B3n%20de%20R%C3%ADo%20Espa%C3%B1ol.pdf)
- DECLARACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍO aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.216/13&referrer=/english/&Lang=S)
- 100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD - XIV Cumbre Judicial Iberoamericana
(http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=6fe6fec-a-4300-46b2-a9f9-f1b6f4219728&groupId=10124)
- DOCUMENTO PRELIMINAR DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39050/S1600924_es.pdf)
- ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA EN TEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas; CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 151; Publicación de las Naciones Unidas, LC/L.3549/REV.2, Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile, octubre de 2013
(<http://www.cepal.org/es/publicaciones/21751-acceso-la-informacion-participacion-justicia-temas-ambientales-americalatina>)
- EL DERECHO AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA Y LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO / Annelise Monteiro Steigleder; Luciano Furtado Loubet (Orgs.) Tomo I America del Sur - Tomo II Centroamérica, México y República Dominicana. Realizado por la Red Latino-Americana de Ministerio Público Ambiental, www.mpambiental.org, Patrocinado por la Fundación AVINA, con el apoyo institucional de la Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA y Fundação Neotrópica do Brasil. Porto Alegre: Suliani Letra & Vida, 2010
(<http://www.mpambiental.org/site/review/6548>)
(<http://www.mpambiental.org/site/review/6549>)

- CODIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMERICA (de 1989) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (<http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4215>)
- PROYECTO DE CÓDIGO MODELO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS – JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL – PARA IBEROAMÉRICA (aprobado en Buenos Aires, el 8 de Junio de 2012) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (http://www.nupej.uff.br/sites/default/files/IIDP_CodADM_ES.pdf)
- CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBERO AMÉRICA (aprobado en Caracas el 28 de Octubre de 2004) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (http://osunalegal.com/yahoo_site_admin/assets/docs/CodigoModelodeProcesosColectivosParaIberoamerica.4711354.doc)

8.2. Anexo II – CUESTIONARIO

1. PAIS: _____

2. RESPONSABLE DEL CUESTIONARIO:

2.1. Indique su/s Nombre/s y Apellido/s:

2.2. Indique su cargo y repartición:

2.3. En caso de que para responder el cuestionario lo auxilien colaboradores, indique su/s nombre/s, apellido/s y cargo/s:

2.4. Indique si concede autorización al Programa de las naciones unidas para el medio ambiente (P.N.U.M.A/O.N.U.) y/o a la Red latinoamericana de ministerios públicos ambientales a utilizar los datos que vuelque en el cuestionario, citándolo debidamente como experto responsable, con el fin de elaborar evaluaciones y diagnósticos regionales de instrumentos de protección ambiental y publicar sus resultados:
SI LO AUTORIZO ...

3. PREGUNTAS PARA CARACTERIZAR LA ESTRUCTURA FISCAL EXISTENTE EN SU PAÍS:

3.1. Niveles de distribución de competencias judiciales constitucionales existentes (marque con x todos los correspondientes):

FEDERAL ...

NACIONAL ...

REGIONAL ...

PROVINCIAL ...

ESTADUAL ...

MUNICIPAL ...

3.2. Niveles de distribución competencial fiscal existentes (marque con x todos los ordenes correspondientes):

FEDERALES ...

NACIONALES ...

REGIONALES ...

PROVINCIALES/ESTADUALES ...

MUNICIPALES ...

3.3. Indique a qué nivel pertenece usted (marque con x el correspondiente):

FEDERAL ...
NACIONAL ...
REGIONAL ...
PROVINCIAL ...
ESTADUAL ...
MUNICIPAL ...

3.4. Indique la legislación orgánica esencial que regula su funcionamiento:

3.5. Indique si su organización cuenta con el auxilio de los siguientes recursos:

POLICÍA ADMINISTRATIVA AUXILIAR ...
ORGANISMO PERICIAL FORENSE Y DE INVESTIGACION CRIMINAL PROPIO ...
(enúncielo y cite artículo/s y normativa/s)

3.6. Si juzga necesaria alguna explicación adicional sobre el punto, hágalo brevemente a continuación:

3.7. Indique los links oficiales de consulta de la legislación orgánica esencial citada en el punto:

4. PREGUNTAS PARA CONOCER LA REGULACIÓN ESENCIAL DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTE EN SU PAÍS:

4.1. Indique la competencia material que abarca la regulación de protección ambiental en su país (marque con x todos los ordenes correspondientes):

CONSTITUCIONAL ...
ADMINISTRATIVA-EXTRAJUDICIAL ...
ADMINISTRATIVA-JURISDICCIONAL ...
CIVIL ...
PENAL ...

4.2. Indique el marco Constitucional de la regulación de la protección ambiental (citar artículo/s y normativa):

4.3. Indique el marco Legal esencial de la regulación de protección ambiental (citar artículo/s y normativa/s):

4.4. Indique si la legislación nacional posee los siguientes principios ambientales y su fuente de regulación (marque con x todos los correspondientes):

... DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL (citar artículo/s y normativa/s)

... DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES (citar artículo/s y normativa/s)

... DE ACCESO A JUSTICIA AMBIENTAL (citar artículo/s y normativa/s)

... DE PRECAUCIÓN AMBIENTAL (citar artículo/s y normativa/s)

... DE PREVENCIÓN AMBIENTAL (citar artículo/s y normativa/s)

... DE RESPONSABILIDAD DEL CONTAMINADOR AMBIENTAL (citar artículo/s y normativa/s)

4.5. Si juzga necesaria alguna explicación adicional sobre el punto, hágalo brevemente a continuación:

4.6. Indique los links oficiales de consulta de la normativa citada en el punto:

5. PREGUNTAS PARA CONOCER LAS HERRAMIENTAS LEGALES VINCULADAS A DERECHOS DE ACCESO A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

5.1. Indique las medidas procesales de protección existentes para asegurar la tutela ambiental en los siguientes casos concretos:

5.1.1. ANTE LA NEGACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (marque con X todos los correspondientes):

... RECLAMACION ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONSTITUCIONAL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

5.1.2. ANTE LA NEGACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIONES, PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES (marque con X todos los correspondientes):

... RECLAMACION ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONSTITUCIONAL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

5.1.3. ANTE LA INCERTIDUMBRE DE RIESGO DE POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES POR UNA ACTIVIDAD HUMANA (marque con X todos los correspondientes):

... RECLAMACION ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONSTITUCIONAL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

5.1.4. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES INCORPORADAS EN DECLARACIONES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS O PERMISOS EXTENDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN (marque con X todos los correspondientes):

... RECLAMACION ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONSTITUCIONAL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

5.1.5. ANTE DAÑOS AMBIENTALES CONSUMADOS POR UNA ACTIVIDAD HUMANA (marque con X todos los correspondientes):

... RECLAMACION ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CONSTITUCIONAL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... ACCION PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

5.2. Si juzga necesaria alguna explicación adicional sobre el punto, hágalo brevemente a continuación:

5.3. Indique los links oficiales de consulta de la normativa citada en el punto:

6. PREGUNTAS DIRIGIDAS A OBTENER UN DETALLE GENERAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL VIGENTE EN SU LEGISLACIÓN

6.1. Indique los bienes ambientales que se hallan protegidos por su legislación y desarrolle las respuestas jurídicas a su afectación negativa (marque con X todos los correspondientes):

6.1.1. FLORA ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.2. FAUNA ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s) _

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.3. SUELO ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.4. AGUA

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.5. AIRE ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.6. PRODUCTOS QUÍMICOS Y DESECHOS INDUSTRIALES ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.7. RESIDUOS DOMICILIARIOS ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AREAS PROTEGIDAS ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.1.9. PATRIMONIO CULTURAL ...

... SANCIÓN ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... REPARACIÓN CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... CONDENA PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

6.2. Si juzga necesaria alguna explicación adicional sobre el punto, hágalo brevemente a continuación:

6.3. Indique los links oficiales de consulta de la normativa citada en el punto:

7. PUNTO ORIENTADO A LOGAR UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACCESO A JUSTICIA AMBIENTAL

7.1. Formas alternativas de resolución de conflictos ambientales (marque con x todos los correspondientes):

7.1.1. MEDIACIÓN O JUSTICIA RESTAURATIVA:

... ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

7.1.2. CONCILIACIÓN:

... ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

7.1.3. NEGOCIACIÓN:

... ADMINISTRATIVA (citar artículo/s y normativa/s)

... CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... PENAL (citar artículo/s y normativa/s)

7.1.4. ARBITRAJE:

... ADMINISTRATIVO (citar artículo/s y normativa/s)

... CIVIL (citar artículo/s y normativa/s)

... PENAL (citar artículo/s y normativa/s) _____

7.1.5. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PENAL:

... Casos reglados en que procede (citar artículo/s y normativa/s)

7.2. Formas de solución jurisdiccional de casos ambientales (marque con x todos los correspondientes):

7.2.1. Legitimación habilitada en las acciones ambientales NO PENALES que prevé su sistema:

POPULAR ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

COLECTIVA ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

INDIVIDUAL HOMOGÉNEA (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

INDIVIDUAL ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

7.2.2. Figuras procesales habilitadas en las acciones ambientales PENALES que prevé su sistema:

ACUSADOR PÚBLICO (FISCAL) ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

QUERELLANTE CRIMINAL ADHESIVO ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

QUERELLANTE CRIMINAL EXCLUSIVO ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

ACTOR CIVIL POPULAR ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

ACTOR CIVIL COLECTIVO ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

ACTOR CIVIL INDIVIDUAL ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO ... (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

7.3. Protección especial de grupos vulnerables y tradicionalmente excluidos (marque con x todos los correspondientes):

7.3.1. Indique grupos desaventajados considera especialmente su legislación:

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

DISCAPACITADOS FISICOS ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

DISCAPACITADOS MENTALES ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

COMUNIDADES INDÍGENAS ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

VICTIMAS PENALES ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

REFUGIADOS, INMIGRANTES Y MIGRANTES FORZADOS ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

POBRES ... (citar artículo/s y normativa/s) _____ - _____

MUJERES ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

MINORIAS ÉTNICAS, RELIGIOSAS y/o SEXUALES ... (citar artículo/s y normativa/s)

7.3.2. Indique los legitimados extraordinarios que pueden asumir la representación de grupos vulnerables en:

PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

PROCESOS CIVILES AMBIENTALES (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

PROCESOS PENALES AMBIENTALES (citar legitimados, artículo/s y normativa/s)

7.4. Si juzga necesaria alguna explicación adicional sobre el punto, hágalo brevemente a continuación:

7.5. Indique los links oficiales de consulta de la normativa citada en el punto:

8. PREGUNTAS PARA CONOCER LA ORGANIZACIÓN FISCAL EN RELACION A LA REGULACION DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL (marque con X todas las correspondientes):

8.1. Indique la distribución de funciones competenciales en materia ambiental en la organización fiscal en análisis:

NINGUNA FISCALÍA POSEE ESA FUNCIÓN ...

DISTRIBUIDA SOLO EN FISCALÍAS COMUNES (por ejemplo penales, o en su caso civiles) ...

DISTRIBUIDA SOLO EN UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS ...

DISTRIBUIDA TANTO EN FISCALÍAS COMUNES COMO EN UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS ...

8.2. Indique la cantidad de fiscalías que tienen la materia ambiental en su organización fiscal:

FISCALÍAS COMUNES PENALES

FISCALÍAS COMUNES NO PENALES

UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS

8.3. Indique las dependencias técnico-científicas auxiliares para pericias y determinaciones ambientales que asisten la organización fiscal:

INSTITUCIONES EXTERNAS ... (enúncielas)

DEPENDENCIAS FISCALES ... (enúncielas y cite artículo/s y normativa/s)

8.4. En caso de existir unidades fiscales especializadas, indique las competencias materiales ambientales que poseen (marque con X todas las correspondientes)

CONSTITUCIONAL ...

ADMINISTRATIVA-EXTRAJUDICIAL ...

ADMINISTRATIVA-JURISDICCIONAL ...

CIVIL ...

PENAL ...

8.5. Indique si están previstas normas de gestión e indicadores de desempeño especiales para la materia ambiental en ese Ministerio Público:

NO ESTAN PREVISTAS ...

SI ESTÁN PREVISTAS ... (citar artículo/s y normativa/s)

9. PREGUNTAS PARA CARACTERIZAR LA ACTUACIÓN DE LAS FISCALÍAS CON COMPETENCIA AMBIENTAL EN SU CONJUNTO (parte de las respuestas de caracterización de la legislación de protección ambiental dadas anteriormente)

9.1. Analice la legitimación de las fiscalías con competencia ambiental para atender las problemáticas paradigmáticas que se analizaron antes y que se exponen a continuación (marque con X todos los ordenes correspondientes):

9.1.1. Ante la negación de información ambiental:

Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.2. Ante la negación de la participación ciudadana en procedimientos de evaluaciones, permisos o licencias ambientales:

Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.3. Ante la incertidumbre de riesgo de posibles daños ambientales por una actividad humana:

Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.4. Ante el incumplimiento de medidas de prevención de riesgos ambientales incorporadas en declaraciones, autorizaciones o permisos extendidos por la administración:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.5. Ante daños ambientales consumados por una actividad humana:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.6. Ante la afectación de la flora:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.7. Ante afectación de fauna:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.8. Ante afectación del suelo:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.9. Ante la afectación del agua:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.10. Ante la afectación del aire:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.11. Ante afectación con productos químicos y desechos industriales:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.12. Ante la afectación con residuos domiciliarios:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.13. Ante afectación del ordenamiento territorial y áreas protegidas:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.14. Ante la afectación del patrimonio cultural:
Se habilita la actuación Fiscal CONSTITUCIONAL ... / ADMINISTRATIVA ... / CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA ... / CIVIL ... / PENAL ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.15. MEDIACION AMBIENTAL:
la Fiscalía puede mediar: ADMINISTRATIVAMENTE ... / JURISDICCIONALMENTE ... /
PENALMENTE ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.16. CONCILIACION AMBIENTAL:
la Fiscalía puede conciliar: ADMINISTRATIVAMENTE ... / JURISDICCIONALMENTE ... /
PENALMENTE ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.17. NEGOCIACION AMBIENTAL:
la Fiscalía puede negociar: ADMINISTRATIVAMENTE ... / JURISDICCIONALMENTE ... /
PENALMENTE ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.18. ARBITRAJE AMBIENTAL:
la Fiscalía puede arbitrar: ADMINISTRATIVAMENTE ... / JURISDICCIONALMENTE ... /
PENALMENTE ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.19. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PENAL:
la Fiscalía puede adoptarlo: EN TODOS LOS DELITOS AMBIENTALES ... / SOLO EN DELITOS
AMBIENTALES LEVES ... (citar artículo/s y normativa/s)

9.1.20. La Fiscalía esta habilitada a instar acciones ambientales NO PENALES: POPULARES ...
/ COLECTIVAS ... / INDIVIDUALES HOMOGÉNEAS ... / INDIVIDUALES ... (citar artículo/s y
normativa/s) _____

9.1.21. La Fiscalía esta habilitada para ejercitar las siguientes figuras procesales en acciones
ambientales PENALES: ACUSADOR PÚBLICO ... / ACTOR CIVIL PÚBLICO COLECTIVO ... /
ACTOR CIVIL PÚBLICO INDIVIDUAL ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

9.1.22. La Fiscalía esta habilitada para ejercitar una protección especial de grupos vulnerables y tradicionalmente excluidos en: PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES ... / PROCESOS CIVILES AMBIENTALES ... / PROCESOS PENALES AMBIENTALES ... (citar artículo/s y normativa/s) _____

9.2. Si juzga necesaria alguna explicación adicional sobre el punto, hágalo brevemente a continuación:

9.3. Indique los links oficiales de consulta de la normativa citada en el punto:

8.3. Anexo III - FUENTES BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS DE CONSULTA (de consulta web):

- DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 (http://www.pnuma.org/sociedad_civil/reunion2013/documentos/STAKEHOLDER%20PARTICIPATION/1992%20Declaraci%C3%B3n%20de%20R%C3%A1do%20Español.pdf)
- DECLARACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍO aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.216/13&referer=/english/&Lang=S)
- 100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD - XIV Cumbre Judicial Iberoamericana
(http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=6fe6feca-4300-46b2-a9f9-f1b6f4219728&groupId=10124)
- DOCUMENTO PRELIMINAR DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39050/S1600924_es.pdf)
- ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA EN TEMAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas; CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 151; Publicación de las Naciones Unidas, LC/L.3549/REV.2, Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile, octubre de 2013
(<http://www.cepal.org/es/publicaciones/21751-acceso-la-informacion-participacion-justicia-temas-ambientales-america-latina>)
- EL DERECHO AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA Y LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO / Annelise Monteiro Steigleder; Luciano Furtado Loubet (Orgs.) Tomo I America del Sur - Tomo II Centroamérica, México y República Dominicana. Realizado por la Red Latino-Americana de Ministerio Público Ambiental, www.mpambiental.org, Patrocinado por la Fundación AVINA, con el apoyo institucional de la Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA y Fundação Neotrópica do Brasil. Porto Alegre: Suliani Letra & Vida, 2010
(<http://www.mpambiental.org/site/review/6548>) (<http://www.mpambiental.org/site/review/6549>)
- CODIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMERICA (de 1989) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (<http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4215>)
- PROYECTO DE CÓDIGO MODELO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS – JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL – PARA IBEROAMÉRICA (aprobado en 17 Buenos Aires, el 8 de Junio de 2012) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
(http://www.nupej.uff.br/sites/default/files/IIDP_CodADM_ES.pdf)
- CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBERO AMÉRICA (aprobado en Caracas el 28 de Octubre de 2004) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

(http://osunalegal.com/yahoo_site_admin/assets/docs/CodigoModelodeProcesosColectivosParaIberoamerica.4711354.doc)